ZACAPOAXTLA
AYUNTAMIENTO 2024-2027
UN GOBIERNO CON SENTIDO HUMANO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ORGANO INTERNO DE CONTROL
AUTORIDAD SUBSTANCIADORA
ZACAPOAXTLA
AYUNTAMIENTO
2024-2027

OIC
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.
AUTORIDAD SUBSTANCIADORA.
PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA.
EXPEDIENTE NÚMERO: OICMZ/AS/PRA/001/2025.

SENTENCIA DEFINITIVA.

EN EL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA, A VEINTISIETE DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTISÉIS.

VISTOS para resolver los autos del procedimiento de responsabilidad administrativa OICM/AS/PRA/001/2025.

RESULTANDO.

PRIMERO. Remisión de la denuncia. Con motivo del oficio 21/207/SG/1067/2025 de fecha veintiséis de mayo de dos mil veinticinco, suscrito por el Ciudadano Guillermo Salazar Salazar, Secretario del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Zacapoaxtla, Puebla, mediante el cual remitió a la Contraloría Municipal, el Informe Individual 2023 que fue notificado al Ciudadano Margarito Rojas Parra, Presidente Municipal de Zacapoaxtla, Puebla, en fecha veintidós de mayo de dos mil veinticinco, mediante oficio **ASE/1996-25/OF/OAS** de fecha dieciséis de mayo de dos mil veinticinco, signado por el Ciudadano Francisco Fidel Teomitzi Sánchez, Encargado de Despacho de la Auditoria Superior del Estado de Puebla, mediante el cual se desprende que la Auditoria Superior del Estado de Puebla, como Entidad Fiscalizadora emitió la promoción de responsabilidad administrativa sancionadora **0136-23-22/01-CI-PRAS-02** (página 54); y del oficio número **21/207/CM/126/2025** de fecha veintisiete de mayo de dos mil veinticinco (al que adjuntó un C D debidamente certificado del Informe Individual 2023), suscrito por Uriel Tejeda Flores, en su carácter de Contralor Municipal y Titular del Órgano Interno de Control del Municipio de Zacapoaxtla, Puebla, mediante el cual ordenó a la Autoridad Investigadora el inicio del expediente de investigación de presunta responsabilidad administrativa respecto de los actos u omisiones de los servidores públicos que resultaran responsables.

SEGUNDO. Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa. La Autoridad Investigadora remitió el Informe de Presunta Responsabilidad Administraba OICMZ/AI/003/2025 de fecha primero de diciembre de dos mil veinticinco, en el que determinó que las personas ex servidoras públicas **Evelio Navarro Lara**, en su carácter de Presidente Municipal, **Víctor Manuel Amador Santos**, en su carácter de Contralor Municipal, **Verónica Vázquez Vázquez**, en su carácter de Tesorera Municipal, todos de la Administración Pública Municipal 2021-2024, probablemente incurrieron en las presuntas faltas administrativas consistente; para el primero de los nombrados la omisión del cumplimiento de las obligaciones generadas en representación del Ayuntamiento, según la CLÁUSULA CUARTA del Convenio de Coordinación Intermunicipal 2021-2024 para el Financiamiento de la Operación del Centro Penitenciario de Zacapoaxtla, Puebla del ejercicio 2023; para el segundo de los nombrados la omisión del cumplimiento de vigilancia del ejercicio del gasto público, asi como el cumplimiento de las disposiciones sobre el registro y contabilidad, que tienen relación directa con las obligaciones generadas por el Ayuntamiento, según la CLÁUSULA CUARTA del Convenio de Coordinación Intermunicipal 2021-2024 para el Financiamiento de la Operación del Centro Penitenciario de Zacapoaxtla, Puebla del ejercicio 2023; y para la tercera de los nombrados la omisión del cumplimiento de administración de los ingresos, especificamente el no llevar el proceso de registro y el de remitir al ente Fiscalizador (Auditoria Superior del Estado de Puebla, para el ejercicio fiscal 2023) el CFDI así como documentación comprobatoria donde conste que la cuenta de abono corresponde al Centro penitenciario de Zacapoaxtla, Puebla (por concepto de pago mediante transferencia bancaria por $1,818,003.77 un millón ochocientos dieciocho mil tres pesos 77/100 M.N., y por $779,144.48 setecientos setenta y nueve mil ciento cuarenta y cuatro pesos 48/100 M.N.).

TERCERO. Procedimiento de Responsabilidad Administrativa. Por acuerdo de fecha diecisiete de diciembre de dos mil veinticinco, la Autoridad Substanciadora tuvo por recibido el Informe de mérito y se ordenó la instrucción del procedimiento, en contra de las personas ex servidoras públicas Evelio Navarro Lara, en su carácter de Presidente Municipal, Víctor Manuel Amador Santos, en su carácter de Contralor Municipal, Verónica Vázquez Vázquez, en su carácter de Tesorera Municipal, todos de la Administración Pública Municipal 2021-2024, en virtud de que probablemente incumplió con las obligaciones previstas en el artículo 49 fracción I de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; asi mismo, en el referido acuerdo se ordenó citar a las personas ex servidores públicos para que se presentaran personalmente a la audiencia inicial el día nueve de enero de dos mil veintiséis, a efecto de que rindieran su declaración por escrito o verbalmente y ofrecieran las pruebas que estimaran necesarias para su defensa, además se les hiciera del conocimiento su derecho a ser asistidos por un defensor perito en la materia; sujetos a procedimiento que fueron emplazados en términos de Ley mediante oficios AS/003/2025, AS/004/2025, AS/005/2025, todos de fecha diecisiete de diciembre de dos mil veinticinco, y diligenciados en fecha veinticuatro de diciembre de dos mil veinticinco; por diligencia de fecha nueve de enero de dos mil veintiséis, esta Autoridad Substanciadora difirió el desahogo de la Audiencia Inicial en virtud de que las partes no fueron citadas dentro de los términos que dispone la fracción IV del artículo 208 de la Ley General de

Responsabilidades Administrativas; mediante oficio AS/001/2026 de fecha nueve de enero de dos mil veintiséis, se notificó al presunto responsable EVELIO NAVARRO LARA respecto de la nueva fecha señalada para la celebración de la audiencia inicial.

CUARTO. Audiencia inicial. El día veintisiete de enero de dos mil veintiséis, tuvo verificativo la Audiencia Inicial del presente procedimiento, compareciendo ante la Autoridad Substanciadora a su desahogo, la Autoridad Investigadora y las personas presuntas responsables Evelio Navarro Lara, Víctor Manuel Amador Santos, Verónica Vázquez Vázquez, en compañía de su defensor particular licenciado Toribio Moreno Carpinteyro; audiencia inicial en la que la Autoridad Investigadora ratifico su informe de presunta responsabilidad administrativa en los términos planteados, y las personas presuntas responsables produjeron contestación por escrito, respecto al informe de presunta responsabilidad administrativa instaurado en su contra, correspondientes a las conductas probablemente infractoras que les fueron atribuidas, asimismo ofrecieron material probatorio de su parte.

QUINTO. Admisión de pruebas. Por acuerdo de fecha tres de febrero de dos mil veintiséis, se admitieron los medios de prueba ofrecidos por la Autoridad Investigadora consistente en; I.- LA PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA. que consiste en el oficio número 21/207/CM/126/2025, de fecha veintisiete de mayo de dos mil veinticinco, suscrito por Uriel Tejeda Flores, en su carácter de Contralor Municipal y titular del Órgano Interno de Control; II.- LA PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA. que consiste en la copia certificada por la Secretaría General del Ayuntamiento de Zacapoaxtla, Puebla, de fecha veintiséis de mayo de dos mil veinticinco, respecto de un DISCO COMPACTO DE ALMACENAMIENTO DE LA MARCA VERBATIM CD-R DE700 MB DE CAPACIDAD, que contiene el "Informe Individual 2023"; III.- LA PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA. que consiste en el oficio SA/1072/2025, de fecha veintidós de julio de dos mil veinticinco, suscrito por el licenciado Guillermo Salazar Salazar, en su carácter de Secretario General del Ayuntamiento de Zacapoaxtla, Puebla; IV.- LA PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA. que consiste en el oficio TMZ/CONT-2025, de fecha dieciocho de julio de dos mil veinticinco, suscrito por Felipe Barragan Lobato, en su carácter de Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Zacapoaxtla, Puebla; V.- LA PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA. que consiste en el oficio 21/207/CM/186/2025, de fecha catorce de agosto de dos mil veinticinco, suscrito por Uriel Tejeda Flores, en su carácter de Contralor Municipal y Titular del Órgano Interno de Control del Ayuntamiento de Zacapoaxtla, Puebla; VI.- LA PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA. que consiste en el oficio DRH/2025/0271 de fecha veintisiete de agosto de dos mil veinticinco, suscrito por la Ingeniera Margarita Tamanis Romero, en su carácter de Directora de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Zacapoaxtla, Puebla; VII.- LA INSTRUMENTAL PÚBLICA DE ACTUACIONES. que consiste en todas y cada una de las diligencias y actuaciones que se lleguen a practicar dentro del procedimiento; VIII.- LA PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. Medio probatorio que se admitió en los términos en que la ofreció. Documentales que se tuvieron por desahogadas por su propia naturaleza.

216

Por su parte los presuntos responsables Evelio Navarro Lara, Víctor Manuel Amador Santos, Verónica Vázquez Vázquez, ofrecieron y se les admitió el material probatorio de su parte, consistente en; I.- LA PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA.- que consiste en el Convenio de Coordinación Intermunicipal 2021-2024 para el Financiamiento de la Operación del Centro Penitenciario de Zacapoaxtla (CERESO); III.- LA PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA.- que consiste en los recibos oficiales y acuses de la Auditoría Superior del Estado (ASE Puebla); IV.- LA PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA.- que consiste en el oficio número TM/091/2024, de fecha trece de agosto de dos mil veinticuatro; V.- LA PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA.- que consiste en el oficio número TM/107/2024, de fecha diecisiete de septiembre de dos mil veinticuatro; VI.- LA PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA.- que consiste en los CFDI, pólizas contables, comprobantes de transferencia bancaria y documentación de soporte; VII.- LA PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA.- que consiste en las constancias laborales/administrativas respecto de Evelio Navarro Lara, Víctor Manuel Amador Santos y Verónica Vázquez Vázquez. Documentales que se tuvieron por desahogadas por su propia naturaleza.

Luego entonces, en cuanto hace al tercero interesado en el procedimiento (Auditoria Superior del Estado de Puebla), al haberse adherido en el mismo sentido planteado en el informe de presunta responsabilidad administrativa por la Autoridad Investigadora, se le tuvo por ofrecidos los mismos medios de prueba y que se omiten enunciarse en obvio de repeticiones.

En ese orden de ideas, y al no existir probanzas pendientes, se declaró abierto el periodo de alegatos para que las partes en un término común de cinco días los rindieran.

SEXTO. Alegatos. Mediante oficio OICMZ/AI/OF/004/2026 de fecha dieciséis de febrero de dos mil veintiséis, se tuvo a la Autoridad Investigadora rindiendo alegatos de su parte; por escrito de fecha dieciséis de febrero de dos mil veintiséis, suscrito por Evelio Navarro Lara, Víctor Manuel Amador Santos, Verónica Vázquez Vázquez, se les tuvo rindiendo alegatos de su parte.

SÉPTIMO. Cierre de Instrucción. Finalmente, mediante acuerdo de fecha veintiséis de febrero de dos mil veintiséis, se declaró cerrada la etapa de alegatos, y de ordeno girar oficio (OICMZ/AS/007/2026) a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno del Estado de Puebla, a fin de que informara a esta Autoridad Substanciadora, si los presuntos responsables tenían o no algún antecedente de sanción administrativa; así mismo, mediante oficio número SABG/OS/UVSEA/2001/2026, se tuvo a la Secretaría requerida rindiendo el informe correspondiente; y mediante acuerdo de fecha diez de abril de dos mil veintiséis, se cerró la instrucción y se ordenó turnar los autos del expediente a la vista para dictar la sentencia definitiva correspondiente de conformidad con lo establecido en el artículo 208 fracción X de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

CONSIDERANDO.

PRIMERO. Competencia. La Autoridad Substanciadora del Órgano Interno de Control del Municipio de Zacapoaxtla, Puebla; de conformidad con los artículos 108 y 109 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 3 fracciones III y XXI, 9 fracción II, 10 y 115 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; resulta competente para resolver el presente procedimiento de responsabilidad administrativa.

Lo anterior, en virtud de que en términos del artículo 109 fracción III, párrafos segundo, quinto y sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los procedimientos de responsabilidad administrativa por las faltas administrativas no graves serán resueltos por los órganos internos de control, como lo es la Contraloría Municipal, dicho precepto legal a la letra reza:

> *"**Artículo 109.** Los servidores públicos y particulares que incurran en responsabilidad frente al Estado, serán sancionados conforme a lo siguiente...*
> ***III...***
> *Las faltas administrativas graves serán investigadas y substanciadas por la Auditoría Superior de la Federación y los órganos internos de control, o por sus homólogos en las entidades federativas, según corresponda, y serán resueltas por el Tribunal de Justicia Administrativa que resulte competente. Las demás faltas y sanciones administrativas, serán conocidas y resueltas por los órganos internos de control.*
> *...*
> *Los entes públicos federales tendrán órganos internos de control con las facultades que determine la ley para prevenir, corregir e investigar actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas; para sancionar aquéllas distintas a las que son competencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos públicos federales y participaciones federales; así como presentar las denuncias por hechos u omisiones que pudieran ser constitutivos de delito ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción a que se refiere esta Constitución.*
> *Los entes públicos estatales y municipales, así como del Distrito Federal y sus demarcaciones territoriales, contarán con órganos internos de control, que tendrán, en su ámbito de competencia local, las atribuciones a que se refiere el párrafo anterior..."*

En términos de los artículos 168 y 169 fracción XXII y XXII Bis de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Puebla, la Contraloría Municipal es el Órgano Interno de Control Municipal encargado de sancionar los actos y omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas, los artículos en cita a la letra precisan:

> *"**Artículo 168.** Cada Municipio contará con una Contraloría Municipal, la cual tendrá las funciones y facultades de un órgano interno de control en el Municipio, estará a cargo de un Contralor Municipal..."*
>
> *"**Artículo 169.** El Contralor Municipal, en el ámbito de su competencia, tendrá las facultades y obligaciones siguientes:*
> *...*
> ***XXII.** Investigar, calificar, sustanciar y resolver el procedimiento administrativo de determinación de responsabilidades en contra de los servidores públicos municipales, en el caso de faltas administrativas no graves de acuerdo a la ley de la materia;*
> ***XXII Bis.-** Investigar, calificar y sustanciar el procedimiento administrativo de responsabilidades en contra de los servidores públicos municipales o particulares en el caso de faltas administrativas graves de acuerdo a la ley de la materia..."*

217

Ahora bien, los numerales 3 fracción IV, 115, 208, fracción X de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, precisan que la autoridad resolutora será la unidad de responsabilidades administrativas de los Órganos Internos de Control, responsable de dictar la resolución respecto de asuntos relacionados con faltas administrativas no graves, los numerales invocadosa la letra señalan:

> *"**Artículo 3.** Para efectos de esta Ley se entenderá por:*
> *...*
> ***IV.- Autoridad resolutora:** Tratándose de Faltas administrativas no graves lo será la unidad de responsabilidades administrativas o el servidor público asignado en los Órganos internos de control. Para las Faltas administrativas graves, así como para las Faltas de particulares, lo será el Tribunal competente..."*
> ***"Artículo 115.** La autoridad a quien se encomiende la substanciación y, en su caso, resolución del procedimiento de responsabilidad administrativa, deberá ser distinto de aquél o aquellos encargados de la investigación..."*
> ***"Artículo 208.** En los asuntos relacionados con Faltas administrativas no graves, se deberá proceder en los términos siguientes:*
> *...*
> ***X.** Una vez trascurrido el periodo de alegatos, la Autoridad resolutora del asunto, de oficio, declarará cerrada la instrucción y citará a las partes para oír la resolución que corresponda, la cual deberá dictarse en un plazo no mayor a treinta días hábiles, el cual podrá ampliarse por una sola vez por otros treinta días hábiles más, cuando la complejidad del asunto así lo requiera, debiendo expresar los motivos para ello..."*

Ahora bien, conforme lo dispuesto en el artículo 50 y 51 fracción XV del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal de Zacapoaxtla, Puebla, el Órgano Interno de Control a través de la Autoridad Substanciadora, es el encargado de resolver los procedimientos de responsabilidades administrativas derivados de faltas administrativas no graves, numerales que a la letra rezan:

> ***"Artículo 50.** La Autoridad Substanciadora es la unidad administrativa encargada de substanciar los procedimientos por la presunta comisión de las faltas administrativas, que dimanen de los Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa emitidos por la Autoridad Investigadora, en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas..."*
>
> ***"Artículo 51.** Es competencia de la **Autoridad Substanciadora** las siguientes:*
>
> *... **XV. Dictar resolución,** en procedimientos de responsabilidad administrativa por **faltas no graves..."***

Por lo que, dentro de la Administración Pública Municipal de Zacapoaxtla, Puebla, la Contraloría Municipal quien actúa también como Órgano Interno de Control, tiene entre sus atribuciones el resolver los procedimientos de responsabilidad administrativa relacionados con faltas administrativas **calificadas como no graves**, correspondiendo por estructura orgánica a la Autoridad Substanciadora el emitir dicha resolución.

En conclusión, dentro de la Administración Pública Municipal de Zacapoaxtla, Puebla, el Órgano Interno de Control es el encargado de resolver los procedimientos de responsabilidad administrativa iniciados en contra de las personas servidoras públicas que incurran en faltas administrativas calificadas como no graves.

SEGUNDO. Marco Normativo. Conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, supletoriamente en lo no previsto por ésta, la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Puebla, y en su caso a los principios generales del derecho conforme a lo dispuesto por el artículo 14, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

TERCERO. Análisis de la conducta atribuida a las personas servidoras públicas. La conducta probablemente infractora que se atribuyó a las personas ex servidoras públicas sujetas a procedimiento atendiendo al Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa contraviene lo dispuesto en el artículo 4 fracción II los sujetos a los que les aplica la Ley General de Responsabilidades Administrativas; así como los principios y directrices que rigen la actuación de los servidores públicos en términos del artículo 7, fracción I; así mismo la conducta imputada está referida en el artículo 49, fracción I, la cual, de acreditarse plenamente, constituiría una causa de responsabilidad administrativa; articulado que a la letra reza:

> *"**Artículo 4.**- Son sujetos de esta Ley:*
> ...
> ***II.** Aquellas personas que habiendo fungido como Servidores Públicos se ubiquen en los supuestos a que se refiere la presente Ley, y..."*
> *"**Artículo 7.** Los **Servidores Públicos observarán en el desempeño de su empleo, cargo o comisión**, los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio público. Para la efectiva aplicación de dichos principios, los Servidores Públicos observarán las siguientes directrices:*
> ***I. -Actuar** conforme a lo que las leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas les atribuyen a su empleo, cargo o comisión, por lo que deben conocer y cumplir las disposiciones que regulan el ejercicio de sus funciones, facultades y atribuciones..."*
> *"**Artículo 49.** Incurrirá en **Falta administrativa no grave** el servidor público cuyos **actos u omisiones incumplan** o transgredan lo contenido en las obligaciones siguientes:*
> ***I.- Cumplir con las funciones, atribuciones** y comisiones encomendadas, observando en su desempeño disciplina y respeto, tanto a los demás Servidores Públicos como a los particulares con los que llegare a tratar, en los términos que se establezcan en el código de ética a que se refiere el artículo 16 de esta Ley..."*

218

De lo dispuesto en el precepto transcrito se desprende que los servidores públicos, están obligados a cumplir con las funciones, atribuciones y comisiones encomendadas observando en su desempeño los principios que rige la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en el caso particular los ciudadanos Evelio Navarro Lara, Víctor Manuel Amador Santos y Verónica Vázquez Vázquez, tuvieron el carácter de personas servidoras públicas, en virtud de haber fungido como Presidente Municipal, Contralor y Tesorera respectivamente, del Ayuntamiento del Municipio de Zacapoaxtla, Puebla, de la Administración Pública Municipal 2021-2024, y al haber tenido el carácter de servidores públicos, debieron acatar lo dispuesto en los numerales referidos.

Pero, ¿qué se entiende por las palabras cumplir, función (pública), y atribución?; según el Diccionario de la Lengua Española define:

> ***CUMPLIR**. Del lat. complēre 'llenar', 'completar'.*[1]
> 1. *tr. Llevar a efecto algo. Cumplir un deber, una orden, un encargo, un deseo, una promesa.*
>
> ***FUNCIÓN**. Del lat. functĭo, -ōnis.*[2]
> 1. *f. Tarea que corresponde realizar a una institución o entidad, o a sus órganos o personas.*
>
> *Sin.: cometido, competencia, responsabilidad, atribución, finalidad, tarea, ocupación.*
>
> *función pública*
> 1. *f. función que desempeñan los entes públicos.*
> 2. *f. Conjunto del personal al servicio de las Administraciones públicas.*
>
> ***ATRIBUCIÓN**. Del lat. attributio, -ōnis.*[3]
> 1. *f. Acción de atribuir.*
> 2. *f. Cada una de las facultades o poderes que corresponden a cada parte de una organización pública o privada según las normas que las ordenen.*

Términos que, de una interpretación hermeneútica aplicada al contexto de la función pública, se identifica plenamente que, las personas servidoras públicas en el presente asunto pertenecientes o que hayan pertenecido al Ayuntamiento del Municipio de Zacapoaxtla, Puebla, tienen en todo momento el deber de cumplir con las actividades que sean parte de su competencia en los limites que marca la ley, con base al puesto que ostente dicha persona servidora pública, y que, está obligado inexcusablemente a cumplir con su deber, en virtud de haber aceptado desempeñar el cargo conferido desde el momento de su nombramiento; pues si no está dispuesto a cumplir con dichas funciones o atribuciones, desde un principio no debió haberse postulado (o aceptado el nombramiento) para ocupar ese cargo de persona servidora pública, que a su vez se traduce en un Agente del Estado (Ayuntamiento de Zacapoaxtla), cuyo objeto es cumplir con los objetivos de las administración pública.

Por tanto, es menester analizar la existencia de las conductas referidas en el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa, si esta se ajusta al respectivo supuesto de responsabilidad administrativa

---

1 *https://dle.rae.es/cumplir?m=form*
2 *https://dle.rae.es/funci%C3%B3n#1hQKTYT*
3 *https://dle.rae.es/atribuci%C3%B3n?m=form*

y sí, derivado de ello, ha lugar a imponerles alguna sanción o, en su defecto, existen causas que justifiquen su actuación y deban relevarse de aquéllas resultando necesario acreditar los siguientes elementos:

1) La calidad subjetiva de ex servidor público probable infractor (en el Ayuntamiento del Municipio de Zacapoaxtla, Puebla) y con ello, su obligación de cumplir con las funciones encomendadas.

2) Obligación de cumplir con sus funciones y atribuciones.

A efecto de demostrar si en el caso se encuentran satisfechos los extremos de la imputación, es pertinente realizar el análisis de las pruebas que obran en el sumario. Asimismo, se señala que su valoración se efectuará atendiendo a lo dispuesto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y de aplicación supletoria en relación a lo establecido por el artículo 118, en la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Puebla, bajo el respeto al principio de taxatividad y el de exhaustividad.

Primeramente resulta necesario precisar que, todas las personas servidoras públicas en los tres niveles de gobierno son sujetos de deberes y obligaciones y por tanto, tienen la encomienda de ajustarse en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, a las obligaciones que les imponen la constitución federal o local, las leyes, los reglamentos y las demás disposiciones legales que les sean aplicables con el fin de salvaguardar los principios de legalidad, honradez, lealtad, excelencia, profesionalismo, objetividad, imparcialidad y eficiencia que rigen el servicio público.

En consecuencia, incurrirá en responsabilidad administrativa aquella persona funcionaria que falte a sus deberes y obligaciones o bien, que con su conducta trasgredan citados principios que rigen a la función pública, resultando necesario que dicha falta sea susceptible de aplicación de una medida disciplinaria, lo que deberá ser debidamente acreditado ante un procedimiento de responsabilidad administrativa que se instaure en su contra, el cual debe ser llevado a cabo por una autoridad competente en el que se sigan todas las formalidades esenciales del procedimiento.

219

Cabe precisar que, de conformidad con los artículos 108 y 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como Ley Suprema que rige el actuar del Estado a través de sus Instituciones, señala lo siguiente: *"108. Para los efectos de las responsabilidades a que alude este Título se reputarán como servidores públicos a... en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza, así como a los servidores públicos de los organismos a los que ésta Constitución otorgue autonomía, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones..."* que, por otra parte el artículo 109 fracción III, contiene las sanciones administrativas a las que pueden hacerse acreedores los servidores públicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de su encargo, previo Procedimiento Administrativo instaurado y substanciado por autoridad con facultades legales reconocidas por la Ley; de lo aludido se desprende que será responsabilidad de las personas servidoras públicas ajustarse, en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, a las obligaciones previstas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en los que se establece como sujetos de dichos ordenamientos jurídicos a los Servidores Públicos, al igual que a las personas que habiendo fungido como servidoras públicas se ubiquen en los supuestos a que se refieren dichos ordenamientos y los particulares vinculados con faltas administrativas graves.

A.- PARA EL EX SERVIDOR PÚBLICO EVELIO NAVARRO LARA.

Por lo que hace al **PRIMER ELEMENTO**:

1.-Elementos Objetivos.	
1.1.-Sujeto Activo.	En ese contexto, la calidad de servidor público respecto del ciudadano Evelio Navarro Lara, se acredita mediante las copias certificadas del expediente laboral remitido por la Dirección de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Zacapoaxtla, Puebla, mediante oficio número DRH/2025/0271, de fecha veintisiete de agosto de dos mil veinticinco, del que se desprende que, la persona servidora pública ostento el cargo como Presidente Municipal Constitucional de Zacapoaxtla, Puebla, del día quince de octubre de dos mil veintiuno al catorce de octubre de dos mil veinticuatro; documentales que se tienen a la vista al momento de emitir la presente resolución, y se le concede valor probatorio pleno en términos del artículo 131 y 159 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en virtud de haber sido ser expedidos por una autoridad en ejercicio de funciones públicas, con la cual se confirma que la persona sujeta a procedimiento se encontraba investida de la calidad de servidora pública al momento de la realización de la conducta imputada, y en consecuencia que le son inherentes todas las obligaciones previstas para los servidores públicos.

1.2.- Acto u omisión que se le reprocha.	A la persona servidora pública se le reprocha el incumplimiento de función de vigilar el cumplimiento de las obligaciones generadas por el convenio de coordinación intermunicipal 2021-2024, ejercicio 2023, y en específico a los encargados de remitir a la Autoridad Fiscalizadora los comprobantes fiscales por internet (CFDI). De la documentación aportada por la Autoridad Investigadora, al advertirse que Evelio Navarro Lara fungió como Presidente Municipal del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Zacapoaxtla, Puebla, durante la administración 2021-2024, cuando cometió la infracción que se le imputa, por lo que se considera que era la máxima autoridad administrativa y política a nivel local, dentro de la estructura del gobierno de tres niveles: federal, estatal y municipal, situación que opera en su contra, ya que por su nivel debería ser el ejemplo para sus subalternos, y su antigüedad radica en los cuatro años en que estuvo desempeñando ese cargo; además, contaba al momento de la omisión, con la expertiz, criterio y conocimiento suficiente de la legislación aplicable a su nombramiento, por lo que se sostiene que conocía los alcances del cumplimiento o incumplimiento del debido desempeño de su función; además que, la solventación fue con motivo de la Cédula de Resultados Finales y Observaciones Preliminares de la Auditoria Especial de Cumplimiento Financiero de la Cuenta Pública 2023, donde tuvo esa última oportunidad de subsanar la omisión de la documentación generada y remitida durante la época en la que aún ostentaba el cargo público, se colige que la obligación no surgió a partir del mes de diciembre de dos mil veinticinco, sino mucho antes de haberse realizado el proceso de entrega-recepción a la administración 2024-2027.
1.3.- Bien Jurídico Tutelado.	El bien jurídico tutelado en la administración pública es el correcto y regular funcionamiento del Estado, abarcando la probidad de los servidores y el cuidado de los recursos públicos. Su protección busca evitar abusos de poder y garantizar que las instituciones sirvan a la sociedad, observando disciplina.
1.4 Sujeto Pasivo y Resultado.	El incumplimiento a las funciones y atribuciones del servicio público, origina una trasgresión a la colectividad, pues el objetivo que persigue el Estado a través de sus agentes, es el de servir eficientemente a la sociedad, y que, a la través de la administración pública en sus tres niveles, se persigue la optimización de los recursos públicos disponibles, empleando políticas públicas idóneas para alcanzar esa distribución correcta, y si bien es cierto que en el presente asunto no se le reprocha a la persona servidora pública un inadecuado manejo de recursos públicos financieros, también lo es que, necesita disciplina en su actuar para que exista coherencia en los resultados al rendir cuentas a los Entes Fiscalizadores, y no solamente desde el aspecto financiero, sino también en el de su desempeño como servidor público.

En lo concerniente al **SEGUNDO ELEMENTO** relativo a la obligación de cumplir con sus funciones y atribuciones, es que en fecha quince de enero de dos mil veinticinco, mediante oficio número PMZ/0033/2025, el Presidente Municipal vigente remitió contestación a la cedula de resultados preliminares de la cuenta pública 2023, que es con motivo del oficio de citación ASE/0460-2201/RESF-23/DFM-2024 (que fuera notificado en fecha nueve de diciembre de dos mil veinticuatro), mediante el cual a fin de atender a lo solicitado, se proporcionó y remitió un dispositivo de almacenamiento USB, debidamente identificado y certificado, el cual contenía treinta y tres carpetas (que se describen en foja cuarenta y nueve y cincuenta 49-50), y se destacó la leyenda "*... cabe destacar que la lista de carpetas, archivos y peso de la USB, fueron entregadas a la administración 2024-2027, por parte de la administración 2021-2024, por lo que la información no fue manipulada, complementada o editada por los servidores públicos de la administración 2024-2027...*"; información en copias certificadas que se adjuntaron al oficio número SA/1072/2025 que obra en foja 28 veintiocho del expediente, y que no fue objetada por ninguno de los sujetos a procedimiento de responsabilidad administrativa. Circunstancia que de una interpretación sistémica se desprende que, a pesar de que la persona servidora pública ya no ostentaba el cargo público desde el día catorce de octubre de dos mil veinticuatro, no es óbice que, la cuenta pública 2023 fue gestionada durante la administración pública vigente en su mandato, es decir, que toda la información generada en el ejercicio fiscal 2023 fue dentro la temporalidad en la que ejerció su cargo, por lo que bajo el principio de rendición de cuentas en términos del artículo 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, tuvo la obligación de remitir al Ente Fiscalizador toda la documentación soporte para solventar dichas observaciones preliminares de la cuenta a su cargo. Esto se

confirma, pues la administración pública vigente en el ejercicio fiscal 2023, quiso solventar la observación con evidencia de pago mediante transferencia bancaria por $1,818,003.77 (un millón ochocientos dieciocho mil tres pesos 77/100 M.N.) y por $779,144.48 (setecientos setenta y nueve mil ciento cuarenta y cuatro pesos 48/100 M.N.), sin embargo, omitió remitir Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), así como documentación comprobatoria donde conste que la cuenta de abono corresponde al Centro Penitenciario de Zacapoaxtla, Puebla, por lo que se determinó que no solventa la observación, circunstancia que hace prueba plena en su contra y que se traduce en una omisión de su parte.

Se colige que, la persona servidora pública sujeta a procedimiento no cumplió plenamente con sus funciones encomendadas, pues en un principio el motivo del porque Evelio Navarro Lara suscribió el convenio de coordinación intermunicipal 2021-2024 para el financiamiento de la operación del centro penitenciario de Zacapoaxtla, Puebla, fue porque ostento el cargo de Presidente Municipal como figura representante del Ayuntamiento, y en consecuencia todo lo concerniente con el proceso de fiscalización entre lo que se encuentra remitir al Ente Fiscalizador del Estado toda la documentación generada con motivo de la gestión, y en su caso vigilar que, las Unidades Administrativas del Ayuntamiento dieran cumplimiento a dichas actividades para no incurrir en responsabilidad administrativa por la deficiencia en la rendición de cuentas.

Documentales y actuaciones valoradas en el presente elemento, y que se les concede valor probatorio pleno en términos del artículo 131 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, al ser expedidos por una autoridad en ejercicio de funciones públicas en términos de lo señalado en el artículo 159 del mismo ordenamiento legal, con la cual se confirma que la persona sujeta a procedimiento no cumplió con sus funciones, y atribuciones, toda vez que se encontraba investida de la calidad de servidor público al momento de la realización de la conducta imputada, y en consecuencia que le son inherentes todas las obligaciones previstas para los servidores públicos.

B.- PARA EL EX SERVIDOR PÚBLICO VÍCTOR MANUEL AMADOR SANTOS.

291

Por lo que hace al **PRIMER ELEMENTO**:

1.-Elementos Objetivos.	
1.1.-Sujeto Activo.	Que, la calidad de servidor público respecto del ciudadano Victor Manuel Amador Santos, se acredita mediante las copias certificadas del expediente laboral remitido por la Dirección de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Zacapoaxtla, Puebla, mediante oficio número DRH/2025/0271, de fecha veintisiete de agosto de dos mil veinticinco, del que se desprende que, la persona servidora pública ostento el cargo como Contralor Municipal del Ayuntamiento de Zacapoaxtla, Puebla, del día quince de octubre de dos mil veintiuno al catorce de octubre de dos mil veinticuatro; documentales que se tienen a la vista al momento de emitir la presente resolución, y se le concede valor probatorio pleno en términos del artículo 131 y 159 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en virtud de haber sido ser expedidos por una autoridad en ejercicio de funciones públicas, con la cual se confirma que la persona sujeta a procedimiento se encontraba investida de la calidad de servidor público al momento de la realización de la conducta imputada, y en consecuencia que le son inherentes todas las obligaciones previstas para los servidores públicos.
1.2.- Acto u omisión que se le reprocha.	A la persona servidora pública se le reprocha el incumplimiento de función de vigilar el cumplimiento de las obligaciones de las personas servidoras públicas (Adscrita al Ayuntamiento de Zacapoaxtla) y en específico de las generadas por el convenio de coordinación intermunicipal 2021-2024, ejercicio 2023. De la documentación aportada por la Autoridad Investigadora, al advertirse que Víctor Manuel Amador Santos fungió como Contralor Municipal del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Zacapoaxtla, Puebla, durante la administración 2021-2024, cuando cometió la omisión que se le imputa, era una de las máximas autoridades administrativas a nivel local, situación que también opera en su contra, ya que por su nivel debería ser el ejemplo para sus subalternos, y su antigüedad radica en los cuatro años en que estuvo desempeñando ese cargo; además, contaba al momento de la omisión, con la expertiz, criterio y conocimiento suficiente de la legislación aplicable a su nombramiento, por lo que se sostiene que conocía los alcances del cumplimiento o incumplimiento del debido desempeño de su función; pues tal y como se desprende del dispositivo de almacenamiento UBS debidamente certificado, que obra en foja 27 (carpeta CONVENIO 2856 2024) contiene un escrito en formato PDF denominado "OFICIO CONVENIO DE COORDINACION INTERMUNICIPAL 2021 2024" suscrito y firmado por su persona, del que se desprende "*... El que suscribe Victor Manuel Amador Santos, entonces Contralor Municipal del Municipio de Zacapoaxtla Puebla, por medio del presente bajo protesta de decir verdad, refiero que se realizaron actividades con relación a la vigilancia en el cumplimiento al "... Convenio de Coordinación Intermunicipal 2021-2024 para el Financiamiento de la Operación del Centro Penitenciario de Zacapoaxtla, Puebla...", entre las que se encuentran verificar la suscripción, derechos y obligaciones, fecha de vencimiento ...*", que si bien es cierto fue con motivo de solventación referente a las observaciones de la cédula de resultados finales y observaciones preliminares correspondientes al ejercicio 2023, no refirió y/o justifico con elementos

8

	objetivos en concreto que acciones de vigilancia fueron las que haya realizado como por ejemplo una auditoria interna a la Unidad Administrativas en cargada del cumplimiento del convenio, además que, la solventación fue con motivo de la Cédula de Resultados Finales y Observaciones Preliminares de la Auditoria Especial de Cumplimiento Financiero de la Cuenta Pública 2023, donde tuvo esa última oportunidad de subsanar la omisión de la documentación generada y remitida durante la época en la que aún ostentaba el cargo público, se colige que la obligación no surgió a partir del mes de diciembre de dos mil veinticinco, sino mucho antes de haberse realizado el proceso de entrega- recepción a la administración 2024-2027.
1.3.- Bien Jurídico Tutelado.	El bien jurídico tutelado en la administración pública es el correcto y regular funcionamiento del Estado, abarcando la probidad de los servidores y el cuidado de los recursos públicos. Su protección busca evitar abusos de poder y garantizar que las instituciones sirvan a la sociedad, observando disciplina.
1.4 Sujeto Pasivo y Resultado.	El incumplimiento a las funciones y atribuciones del servicio público, origina una trasgresión a la colectividad, pues el objetivo que persigue el Estado a través de sus agentes, es el de servir eficientemente a la sociedad, y que, a la través de la administración pública en sus tres niveles, se persigue la optimización de los recursos públicos disponibles, empleando políticas públicas idóneas para alcanzar esa distribución correcta, y si bien es cierto que en el presente asunto no se le reprocha a la persona servidora pública un inadecuado manejo de recursos públicos financieros, también lo es que, necesita disciplina en su actuar para que exista coherencia en los resultados al rendir cuentas a los Entes Fiscalizadores, y no solamente desde el aspecto financiero, sino también en el de su desempeño como servidor público.

222

En lo concerniente al **SEGUNDO ELEMENTO** relativo a la obligación de cumplir con sus funciones y atribuciones, es que en fecha diez de diciembre de dos mil veinticuatro, suscribió un escrito con el objeto de solventar el Elemento de Revisión en la Cédula de Resultados Finales y Observaciones Preliminares de la Auditoria Especial de Cumplimiento Financiero de la Cuenta Pública 2023, respecto de sus funciones y atribuciones de vigilancia realizadas en el cumplimiento del multicitado Convenio de Coordinación Intermunicipal, refiriendo que únicamente bajo protesta de decir verdad que si vigiló , pero no menciono que actividades realizó, tal y como se desprende de la siguiente imagen que se desprende del dispositivo de almacenamiento UBS debidamente certificado, que obra en foja 27 (carpeta CONVENIO 2856 2024) contiene un escrito en formato PDF denominado "OFICIO CONVENIO DE COORDINACION INTERMUNICIPAL 2021 2024":

Zacapoaxtla, Pue., a 10 de diciembre de 2024.

El que suscribe Victor Manuel Amador Santos, entonces Contralor Municipal del Municipio de Zacapoaxtla Puebla, por medio del presente bajo protesta de decir verdad, refiero que se realizaron actividades con relación a la vigilancia en el cumplimiento al "... Convenio de Coordinación Intermunicipal 2021-2024 para el Financiamiento de la Operación del Centro Penitenciario de Zacapoaxtla, Puebla...", entre las que se encuentran verificar la suscripción, derechos y obligaciones, fecha de vencimiento.

Atentamente

Victor Manuel Amador Santos
Entonces Contralor Municipal
Zacapoaxtla, Puebla 2021-2024

Información en copias certificadas que se adjuntaron al oficio número SA/1072/2025 que obra en foja 28 veintiocho del expediente, y que no fue objetada por ninguno de los sujetos a procedimiento de responsabilidad administrativa. Circunstancia que de una interpretación sistémica se desprende que, a pesar de que la persona servidora pública ya no ostentaba el cargo público desde el día catorce de octubre de dos mil veinticuatro, no es óbice que, la cuenta pública 2023 fue gestionada durante la administración pública vigente en su mandato, es decir, que toda la información generada en el ejercicio fiscal 2023 fue dentro la temporalidad en la que ejerció su cargo, además que, la solventación fue con motivo de la Cédula de

Resultados Finales y Observaciones Preliminares de la Auditoria Especial de Cumplimiento Financiero de la Cuenta Pública 2023, donde tuvo esa última oportunidad de subsanar la omisión de la documentación generada y remitida durante la época en la que aún ostentaba el cargo público, se colige que la obligación no surgió a partir del mes de diciembre de dos mil veinticinco, sino mucho antes de haberse realizado el proceso de entrega- recepción a la administración 2024-2027, sin embargo, omitió vigilar que la Unidad Administrativa obligada a remitir los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI´s), así como documentación comprobatoria donde conste que la cuenta de abono corresponde al Centro Penitenciario de Zacapoaxtla, Puebla, por lo que se determinó que no solventa la observación, circunstancia que hace prueba plena en su contra y que se traduce en una omisión de su parte.

Documentales y actuaciones valoradas en el presente elemento, y que se les concede valor probatorio pleno en términos del artículo 131 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, al ser expedidos por una autoridad en ejercicio de funciones públicas en términos de lo señalado en el artículo 159 del mismo ordenamiento legal, con la cual se confirma que la persona sujeta a procedimiento no cumplió con sus funciones de vigilancia, toda vez que se encontraba investida de la calidad de servidor público al momento de la realización de la omisión imputada, y en consecuencia que le son inherentes todas las obligaciones previstas para los servidores públicos.

C.- PARA LA EX SERVIDORA PÚBLICA VERÓNICA VÁZQUEZ VÁZQUEZ.

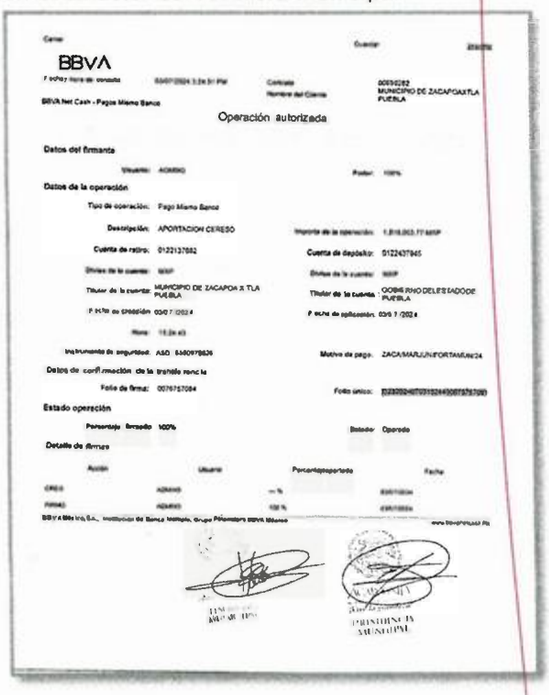
Por lo que hace al **PRIMER ELEMENTO**:

1.-Elementos Objetivos.	
1.1.-Sujeto Activo.	Que, la calidad de servidora pública respecto de la ciudadana Verónica Vázquez Vázquez, se acredita mediante las copias certificadas del expediente laboral remitido por la Dirección de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Zacapoaxtla, Puebla, mediante oficio número DRH/2025/0271, de fecha veintisiete de agosto de dos mil veinticinco, del que se desprende que, la persona servidora pública ostento el cargo como Tesorera Municipal del Ayuntamiento de Zacapoaxtla, Puebla, del día quince de octubre de dos mil veintiuno al catorce de octubre de dos mil veinticuatro; documentales que se tienen a la vista al momento de emitir la presente resolución, y se le concede valor probatorio pleno en términos del artículo 131 y 159 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en virtud de haber sido ser expedidos por una autoridad en ejercicio de funciones públicas, con la cual se confirma que la persona sujeta a procedimiento se encontraba investida de la calidad de servidor público al momento de la realización de la conducta imputada, y en consecuencia que le son inherentes todas las obligaciones previstas para los servidores públicos.
1.2.- Acto u omisión que se le reprocha.	A la persona servidora pública se le reprocha el incumplimiento de función administrativa-contable para cumplimiento de las obligaciones de las personas servidoras públicas (Adscrita al Ayuntamiento de Zacapoaxtla) y en específico de las generadas por el convenio de coordinación intermunicipal 2021-2024, ejercicio 2023, omitiendo remitir los CFDI´S a la Auditoria Superior del Estado de Puebla, desde el primer momento en el que se remitió toda la documentación generada para rendir cuentas respeto del ejercicio fiscal 2023, y que fuera remitida para su revisión incluso antes de que dejara de ostentar dicho cargo públicp. De la documentación aportada por la Autoridad Investigadora, al advertirse que Verónica Vázquez Vázquez fungió como Tesorera Municipal del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Zacapoaxtla, Puebla, durante la administración 2021-2024, cuando cometió la omisión que se le imputa, era una de las máximas autoridades administrativas a nivel local, situación que también opera en su contra, ya que por su nivel debería ser el ejemplo para sus subalternos, y su antigüedad radica en los cuatro años en que estuvo desempeñando ese cargo; además, contaba al momento de la omisión, con la expertiz, criterio y conocimiento suficiente de la legislación aplicable a su nombramiento, por lo que se sostiene que conocía los alcances del cumplimiento o incumplimiento del debido desempeño de su función; pues tal y como se desprende del dispositivo de almacenamiento UBS debidamente certificado, que obra en foja 27 (carpeta CONVENIO 2856 2024) contiene dos documentos en formato PDF denominado "APORTACION MARZO JUNIO FORTAMUN 2024", "APORTACION AGOSTO FORTAMUN 2024" sellado y firmado por su persona con el carácter de Tesorera Municipal, del que se desprende que fueron documentos generados durante la vigencia de su cargo; además que, la solventación fue con motivo de la Cédula de Resultados Finales y Observaciones Preliminares de la Auditoria Especial de Cumplimiento Financiero de la Cuenta Pública 2023, donde tuvo esa última oportunidad de subsanar la omisión de la documentación generada y remitida durante la época en la que aún ostentaba el cargo público, se colige que la obligación no surgió a partir del mes de diciembre de dos mil veinticinco, sino antes de haberse realizado el proceso de entrega-recepción a la administración 2024-2027.

1.3.- Bien Jurídico Tutelado.	El bien jurídico tutelado en la administración pública es el correcto y regular funcionamiento del Estado, abarcando la probidad de los servidores y el cuidado de los recursos públicos. Su protección busca evitar abusos de poder y garantizar que las instituciones sirvan a la sociedad, observando disciplina.
1.4 Sujeto Pasivo y Resultado.	El incumplimiento a las funciones y atribuciones del servicio público, origina una trasgresión a la colectividad, pues el objetivo que persigue el Estado a través de sus agentes, es el de servir eficientemente a la sociedad, y que, a la través de la administración pública en sus tres niveles, se persigue la optimización de los recursos públicos disponibles, empleando políticas públicas idóneas para alcanzar esa distribución correcta, y si bien es cierto que en el presente asunto no se le reprocha a la persona servidora pública un inadecuado manejo de recursos públicos financieros, también lo es que, necesita disciplina en su actuar para que exista coherencia en los resultados al rendir cuentas a los Entes Fiscalizadores, y no solamente desde el aspecto financiero, sino también en el de su desempeño como servidor público.

En lo concerniente al **SEGUNDO ELEMENTO** relativo a la obligación de cumplir con sus funciones y atribuciones, es que en fechas tres de julio y primero de agosto de dos mil veinticuatro, generó dos operaciones con folios únicos 13232024070315244300767570 91 y 13232024080115134500902030 41, las cuales re encuentran respaldadas con su firma y sello oficial de la unidad Administrativa de Tesorería Municipal de la que era titular en esa temporalidad, los cuales con objeto de solventar el Elemento de Revisión en la Cédula de Resultados Finales y Observaciones Preliminares de la Auditoria Especial de Cumplimiento Financiero de la Cuenta Pública 2023, respecto de a los abonos correspondientes al Centro Penitenciario de Zacapoaxtla, Puebla, tal y como se desprende de las siguientes imágenes que se desprenden del dispositivo de almacenamiento UBS debidamente certificado, que obra en foja 27 (carpeta CONVENIO 2856 2024) contiene dos documentos en formato PDF denominado "APORTACION MARZO JUNIO FORTAMUN 2024", "APORTACION AGOSTO FORTAMUN 2024" sellado y firmado por su persona con el carácter de Tesorera Municipal:

224


BBVA

Operación autorizada

Datos del firmante

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Mismo Banco

Descripción: APORTACION CERESO

Cuenta de retiro: 0122137682

Cuenta de depósito: 0122437945

Titular de la cuenta: MUNICIPIO DE ZACAPOA XTLA PUEBLA

Titular de la cuenta: GOBIERNO DEL ESTADODE PUEBLA

Instrumento de seguridad: ASD 8380978626

Motivo de pago: ZACA/MAJU/NFORTAMUN24

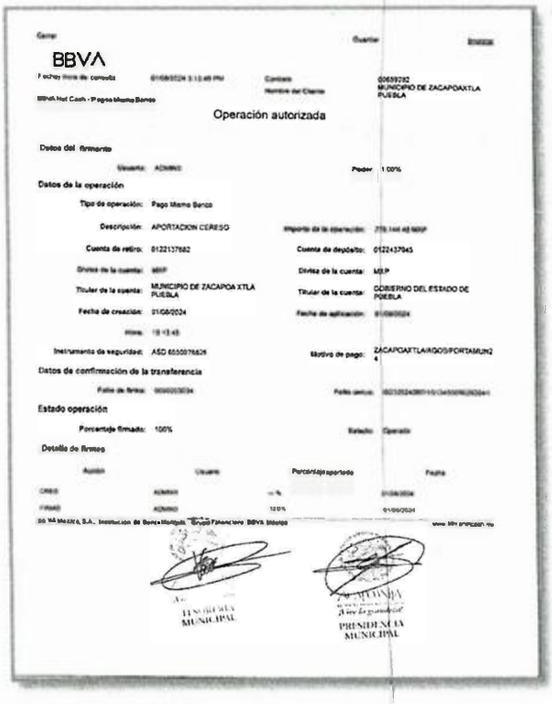
Folio de firma: 0076757084

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas


BBVA

Operación autorizada

Datos del firmante

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Mismo Banco

Descripción: APORTACION CERESO

Cuenta de retiro: 0122137682

Cuenta de depósito: 0122437945

Titular de la cuenta: MUNICIPIO DE ZACAPOA XTLA PUEBLA

Titular de la cuenta: GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA

Fecha de creación: 01/08/2024

Instrumento de seguridad: ASD 8550078626

Motivo de pago: ZACAPCAFTLA/RGOS/FORTAMUN2 4

Datos de confirmación de la transferencia

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Detalle de firmas

Información en copias certificadas que se adjuntaron al oficio número SA/1072/2025 que obra en foja 28 veintiocho del expediente, y que no fue objetada por ninguno de los sujetos a procedimiento de responsabilidad administrativa. Circunstancia que de una interpretación sistémica se desprende que, a pesar de que la persona servidora pública ya no ostentaba el cargo público desde el día catorce de octubre de dos mil veinticuatro, no es óbice que, la cuenta pública 2023 fue gestionada durante la administración pública vigente en su mandato, es decir, que toda la información generada en el ejercicio fiscal 2023 fue dentro la temporalidad en la que ejerció su cargo, además que, la solventación fue con motivo de la Cédula de Resultados Finales y Observaciones Preliminares de la Auditoria Especial de Cumplimiento Financiero de la Cuenta Pública 2023, donde tuvo esa última oportunidad de subsanar la omisión de la documentación generada y remitida durante la época en la que aún ostentaba el cargo público, se colige que la obligación no surgió a partir del mes de diciembre de dos mil veinticinco, sino mucho antes de haberse realizado el proceso de entrega- recepción a la administración 2024-2027, sin embargo, omitió remitir desde un principio en su caso los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI´s), dentro de la documentación comprobatoria donde conste que la cuenta de abono corresponde al Centro Penitenciario de Zacapoaxtla,

Puebla, por lo que se determinó que no solventa la observación, circunstancia que hace prueba plena en su contra y que se traduce en una omisión de su parte.

Documentales y actuaciones valoradas en el presente elemento, y que se les concede valor probatorio pleno en términos del artículo 131 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, al ser expedidos por una autoridad en ejercicio de funciones públicas en términos de lo señalado en el artículo 159 del mismo ordenamiento legal, con la cual se confirma que la persona sujeta a procedimiento no cumplió con sus funciones de vigilancia, toda vez que se encontraba investida de la calidad de servidor público al momento de la realización de la omisión imputada, y en consecuencia que le son inherentes todas las obligaciones previstas para los servidores públicos.

En ese contexto, y en cuanto hace a los elementos analizados para las tres personas ex servidoras públicas en los términos planteados en los apartados A, B y C; tiene refuerzo con base a la aplicación las tesis jurisprudenciales con número de **registro digital 2019469, 2016568, 2018501** y de rubros:

> *"...**RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. CONDICIONES QUE DEBEN SATISFACER LAS LEYES RELATIVAS, EN RELACIÓN CON LOS ASPECTOS DE TAXATIVIDAD EN EL DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR.***
>
> *En el ámbito del derecho administrativo sancionador, en especial, en lo concerniente a los aspectos de taxatividad, basta que el núcleo esencial o básico de la conducta reprochada como falta esté previsto en la ley, siendo innecesaria o superflua la remisión a regulaciones administrativas, como por ejemplo, los manuales de organización, para que se cumpla con el principio de legalidad y dicha norma sea de observancia obligatoria. Ello se debe a que el mandato de tipificación es una fórmula técnica que integra las condiciones de previsión y certeza de la disposición legal, a efecto de que las infracciones y las sanciones no sólo estén previstas con anterioridad a que se produzca la conducta enjuiciable (lex previa), sino que esa descripción tenga un grado de precisión tal (lex certa), que incluya: i) las conductas; ii) las sanciones, así como iii) la metodología para aplicarlas, expuestas con un grado de precisión que prive al operador jurídico de cualquier veleidad, creativa, analógica o simplemente desviada de la letra de la ley. Por tanto, en materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos, es innecesario que las leyes relativas contengan exactamente la conducta infractora, pues basta con que sean idóneas para predecir, con suficiente grado de seguridad esa conducta, las sanciones correspondientes y las condiciones para su individualización. Todo esto, en el entendido de que respondan y sean pertinentes para la observancia de los principios constitucionales inherentes al desempeño de los servidores públicos, de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, previstos en el artículo **109, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos**..."*
>
> *"...**NORMA HABILITANTE EN EL DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. CUANDO CONFIERE PAUTAS PARA AMPLIAS ELECCIONES DEL OPERADOR, LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO LEX CERTA EXIGE LA MÁS COMPLETA, ADECUADA Y PRECISA MOTIVACIÓN.***
>
> *Tratándose del derecho administrativo sancionador, en especial por lo que concierne a los aspectos de taxatividad, resulta aplicable el principio de lex certa, atento al cual, tanto las sanciones como la metodología para aplicarlas deben preverse con un grado de precisión que prive al operador jurídico (autoridad) de cualquier veleidad creativa, analógica o simplemente desviadora de la letra de la ley. Así, cuando la norma habilitante en el derecho administrativo sancionador confiere pautas para amplias elecciones del operador, lo cual involucra diversos grados de discrecionalidad, la aplicación del principio aludido exige la más completa, adecuada y precisa motivación, como mecanismo de rendición de cuentas y antídoto de algún grado de eventual arbitrariedad. Otra posibilidad implícita, es la facultad para emitir reglas, principios, guías o protocolos que, a manera de autorregulación, son pautas de motivación genérica para controlar y encausar el amplio margen de elección, con el fin de acotar márgenes de arbitrio que pudieran trascender en incertidumbre y contrariar el mandato de tipificación. Es decir, opera la regla: a menor regulación se confiere mayor discrecionalidad, que debe acompañarse de mayor motivación, así como de responsabilidad, y viceversa..."*
>
> *"...**NORMAS DE DERECHO ADMINISTRATIVO. PARA QUE LES RESULTEN APLICABLES LOS PRINCIPIOS QUE RIGEN AL DERECHO PENAL, ES NECESARIO QUE TENGAN LA CUALIDAD DE PERTENECER AL DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR.***
>
> *En la jurisprudencia **P./J. 99/2006**, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue contundente en precisar que tratándose de las normas relativas al procedimiento administrativo sancionador, es válido acudir a las técnicas garantistas del derecho penal, en el entendido de que la aplicación de dichas garantías al procedimiento administrativo sólo es posible cuando resulten compatibles con su naturaleza. En ese sentido, para que resulten aplicables las técnicas garantistas mencionadas, es requisito indispensable que la norma de que se trate esté inmersa en un procedimiento del derecho administrativo sancionador, el cual se califica a partir de la existencia de dos condiciones: a) que se trate de un procedimiento que pudiera derivar en la imposición de una pena o sanción (elemento formal); y, b) que el procedimiento se ejerza como una manifestación de la potestad punitiva del Estado (elemento material), de manera que se advierta que su sustanciación sea con la intención manifiesta de determinar si es procedente condenar o sancionar una conducta que se estima reprochable para el Estado por la comisión de un ilícito, en aras de salvaguardar el orden público y el interés general; es decir, ese procedimiento debe tener un fin represivo o retributivo derivado de una conducta que se considere administrativamente ilícita. Sobre esas bases, no basta la posibilidad de que el ejercicio de una facultad administrativa pueda concluir con el establecimiento de una sanción o infracción, sino que se requiere de manera concurrente que su despliegue entrañe una manifestación de la facultad punitiva del Estado, esto es, que el procedimiento tenga un marcado carácter sancionador como sí ocurre, por ejemplo, con los procedimientos sancionadores por responsabilidades administrativas de los servidores públicos..."*

Por lo que queda plenamente acreditado que la presente sentencia analizo todos los elementos objetivos aportados por los sujetos procesales en la secuela del procedimiento de responsabilidad administrativa, respetando en todo momento el principio de taxatividad y el de exhaustividad, tan es así que se respetaron y se abordaron todos los requisitos que exige el artículo 207 de la ley General de Responsabilidades Administrativas, que la misma se encuentra fundada y motivada por las consideraciones de orden legal y de motivación en términos que de la misma se desprenden; así mismo y una vez superados los elementos en

análisis de la conducta atribuida a cada uno de los sujetos a procedimiento, se procede a abordar los siguientes considerandos, a fin se encontrase en aptitud de materializar el sentido del fallo.

CUARTO. Infracción normativa. Una vez que se acreditaron las conductas imputadas a Evelio Navarro Lara, esta autoridad procede a determinar si con la misma se actualiza la infracción normativa del artículo 49 fracción I, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, señalada en el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa de fecha primero de diciembre de dos mil veinticinco.

Así las cosas, en el asunto que nos ocupa la falta administrativa acreditada a las personas presuntas responsables, consistente en:

PERSONA SUJETA A PROCEDIMIENTO.	FALTA-TIPO.
Evelio Navarro Lara.	Falta no grave, por ser el suscriptor en representación del Ayuntamiento de Zacapoaxtla, Puebla (además de ser la máxima autoridad que debe predicar con el ejemplo), respecto de convenio de coordinación intermunicipal 2021-2024 para el financiamiento de la operación del centro penitenciario de Zacapoaxtla, Puebla, y omitir dar cumplimiento a las obligaciones inherentes al mismo, consistente en la rendición de cuentas deficiente ante la Auditoria Superior del Estado de Puebla, respecto a la remisión de documentación soporte al omitir remitir los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (**CFDI's**), así como documentación comprobatoria donde conste que la cuenta de abono corresponde al Centro Penitenciario de Zacapoaxtla, Puebla, con fundamento en el artículo 91 fracciones III, XLVI, XLVII y XLIX de la Ley Orgánica Municipal.
Víctor Manuel Amador Santos.	Falta no grave, al no dar cumplimiento a su obligación de vigilar el cumplimiento de las normas de control y fiscalización de la Unidad Administrativa de Tesorería Municipal, con fundamento en el artículo 169 fracciones II, V y XII de la Ley Orgánica Municipal.
Verónica Vázquez Vázquez.	Falta no grave, al omitir remitir los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI's), así como documentación comprobatoria donde conste que la cuenta de abono corresponde al Centro Penitenciario de Zacapoaxtla, Puebla, o en su caso en cooperación al ex presidente Evelio Navarro Lara, proporcionar dicha información que fuera generada en su Unidad Administrativa de Tesorería Municipal, pues el haber dejado de ostentar el cargo de Tesorera el día 14 de octubre de dos mil veinticuatro, no la exige de su obligación de rendición de cuentas, con fundamento en el artículo 166 fracción IV y VI de la Ley Orgánica Municipal.

226

De modo que, a fin de establecer si con las faltas administrativas imputadas a la persona sujeta a procedimiento se actualizan los preceptos legales invocados, resulta necesario hacer alusión a lo expuesto en el considerando **Tercero** que, al relacionarlo con la falta administrativa acreditada, se actualiza en sentido negativo las obligaciones contenidas en el artículo 49 fracción I de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que dispone:

> *"**Artículo 49.** Incurrirá en **Falta administrativa no grave** el servidor público cuyos **actos u omisiones incumplan** o transgredan lo contenido en las obligaciones siguientes:*
> ***I.- Cumplir con las funciones, atribuciones y comisiones encomendadas**, observando en su desempeño disciplina y respeto, tanto a los demás Servidores Públicos como a los particulares con los que llegare a tratar, en los términos que se establezcan en el código de ética a que se refiere el artículo 16 de esta Ley..."*

Lo anterior significa que la infracción a dicha obligación se actualiza cuando un servidor público omite cumplir con las atribuciones encomendadas, sin observar en su desempeño disciplina.

Ahora bien, la persona ex Servidora pública **Evelio Navarro Lara**, al habérsele acreditado los dos elementos de estudio en el punto tercero de los considerandos de esta sentencia, por lo tanto, se actualiza en sentido negativo la obligación contenida en el artículo 49 fracción I de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Así mismo, la persona ex servidora pública **Víctor Manuel Amador Santos**, al habérsele acreditado los dos elementos de estudio en el punto tercero de los considerandos de esta sentencia, por lo tanto, se actualiza en sentido negativo la obligación contenida en el artículo 49 fracción I de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Así mismo, la persona ex servidora pública **Verónica Vázquez Vázquez**, al habérsele acreditado los dos elementos de estudio en el punto tercero de los considerandos de esta sentencia, por lo tanto, se actualiza en sentido negativo la obligación contenida en el artículo 49 fracción I de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

En virtud de que se ha actualizado la infracción al artículo 49 fracción I de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, se determina que Evelio Navarro Lara, Víctor Manuel Amador Santos y Verónica Vázquez Vázquez con su actuar **INCURRIERON EN RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA**, por lo que es dable determinar una sanción para cada uno de ellos con base a la individualización que se les realice.

QUINTO. Defensa de las personas sujetas a procedimiento. Así las cosas, y en atención al principio de congruencia, exhaustividad y taxatividad, se deben atender las manifestaciones y pruebas que aporten los sujetos a procedimiento Evelio Navarro Lara, Víctor Manuel Amador Santos y Verónica Vázquez Vázquez, quienes dieron contestación de forma coleglada al informe de presunta responsabilidad administrativa instaurado en su contra, quien actuaron por sí mismos en audiencia inicial y con intervención de su defensor particular, Licenciado Toribio Moreno Carpinteyro; asimismo emplearon defensas de su parte en los siguientes términos:

En audiencia inicial de fecha veintisiete de enero de dos mil veinticinco, al dar contestación por escrito (fojas 152 a la 163) al informe de presunta responsabilidad administrativa, manifestaron que la conducta observada es por la supuesta omisión de remitir comprobantes fiscales a la auditoria Superior del Estado; que, del acuerdo de Autoridad Investigadora de fecha tres de junio de dos mil veinticinco se desprende que la conducta observada no consiste en la falta de pago de las aportaciones (del convenio de coordinación intermunicipal), sino exclusivamente en una deficiente remisión de comprobantes fiscales (CFDI y documentación soporte) a la Auditoria Superior del Estado, con motivo del procedimiento de solventación de la observación correspondiente al ejercicio fiscal 2023; que, en efecto la propia autoridad fiscalizadora reconoce expresamente que la entidad Fiscalizada sí acreditó la realización de los pagos, y la única observación subsistente se limita a un acto posterior, de naturaleza meramente documental, consistente en no haber acompañado a la solventación; que, la falta atribuida es de carácter formal y procedimental, vinculada a un momento especifico del proceso de fiscalización (enero 2025), y no a la ejecución material del convenio, lo que resulta jurídicamente incompatible; que, los servidores públicos cesaron formalmente en el ejercicio de sus funciones en octubre de 2024, como se acredita con las constancias laborales que obran en el expediente, y que al momento que surgió la omisión que se les reprocha, los comparecientes carecían de calidad de servidores públicos, así como de competencia jurídica y material para intervenir, por lo que dicen que no existe relación temporal, funcional y material, que el convenio de coordinación intermunicipal para el financiamiento de la operación del centro penitenciario de Zacapoaxtla, no advierte disposición expresa de remitir comprobantes fiscales por internet ni a la Secretaría Ejecutiva del Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ni a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado ni a la auditoria Superior del Estado de Puebla, por lo que no puede configurarse válidamente una omisión ni un incumplimiento del convenio, porque no hay falta sin obligación previamente establecida, lo que vulnera de manera directa los principios de legalidad, tipicidad, debido proceso y responsabilidad personal, rectores del derecho administrativo sancionador; así mismo del material probatorio que ofrecieron los sujetos a procedimiento a fin de acreditar sus defensas empleadas (I) de la documental pública consistente en el convenio de coordinación intermunicipal 2021-2024, que obra en autos prueba parcialmente que dentro de las obligaciones no existe cláusula que imponga obligaciones de remitir CFDI´S a la ASE, ni a la Secretaría Ejecutiva ni a la SSP, pero no es el medio de prueba idóneo para acreditar su defensa consistente en la carencia del deber jurídico previo y determinado de la imputación (dentro del IPRA); (II) de la documental pública consistente en los oficios PMZ/023/2025, PMZ/036/2025 y PMZ/038/2025, acredita parcialmente su defensa consistente en que, los requerimiento y su atención (de la contestación a la cédula de resultados preliminares de la cuenta pública 2023), se realizaron en el año dos mil veinticinco, empero a pesar de que las personas servidoras públicas ya no ostentaban el cargo público desde el día catorce de octubre de dos mil veinticuatro, no es óbice que, la cuenta pública 2023 fue gestionada durante la administración pública 2021-2024, es decir, que toda la información generada en el ejercicio fiscal 2023 fue dentro la temporalidad en la que ejercieron su cargo, por lo que bajo el principio de rendición de cuentas en términos del artículo 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, tuvieron la obligación de remitir al Ente Fiscalizador toda la documentación soporte para solventar dichas observaciones preliminares de la cuenta a su cargo; (III) de los recibos oficiales y acuses de la Auditoria Superior del Estado, acredita parcialmente su defensa empleada, consistente en que el Ente Fiscalizado es el Ayuntamiento del Municipio de Zacapoaxtla, Puebla, y que el motivo de la promoción de responsabilidad administrativa es por la omisión de remitir los CFDI´S aludidos y por motivo de falta de pago de las aportaciones con motivo del convenio intermunicipal, pero no cuanto hace a la supuesta falta del momento temporal exacto (enero 2025) en el que se formuló y exigió la documentación, pues como se dijo en líneas que anteceden, que toda la información generada en el ejercicio fiscal 2023 fue dentro la temporalidad en la que ejercieron su cargo, por lo que bajo el principio de rendición de cuentas en términos del artículo 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, tuvieron la obligación de remitir al Ente Fiscalizador toda la documentación soporte para solventar dichas observaciones preliminares de la cuenta a su cargo, y que en su caso en fojas cincuenta se precisó que la información que se remitía para solventar las observaciones al ejercicio fiscal 2023, se entregó fielmente a como obraba en el dispositivo de almacenamiento USB entregada por la administración 2021-2024, documental que no fue objetada por los presuntos responsables en el presente procedimiento; (IV) de la documental pública consistente en el oficio TM/091/2024, no se acredita que haya remitido los CFDI´S a la Auditoría Superior del Estado de Puebla, empero si se acredita que dicha documentación fue generada durante la gestión de la ad ministración pública municipal 2021-2024, y en su caso no tenían impedimento para remitir la misma dentro de la solventación a la cédula de resultados preliminares de la cuenta pública 2023, junto con la demás información remitida en el dispositivo de almacenamiento USB; (V) de la documental privada consistente en los CFDI´S, prueba su defensa consistente en haber generado en su oportunidad la documentación durante su gestión del ejercicio fiscal 2023, pero con los mismos no prueba que los hayan remitido al ente Fiscalizador, junto con la demás información remitida en el dispositivo de almacenamiento USB; y (VII) de la documental pública consistente en las constancias de los expedientes laborales de los sujetos a procedimiento Evelio Navarro Lara, Víctor Manuel Amador Santos y Verónica Vázquez Vázquez, se prueba que los mismo ostentaron los cargos

atribuidos a cada uno de ellos y que en catorce de octubre de dos mil veinticuatro, dejaron de ostentar el cargo público con motivo del proceso de entrega recepción, pero no es óbice que toda la información generada en el ejercicio fiscal 2023 fue dentro la temporalidad en la que ejercieron su cargo, por lo que bajo el principio de rendición de cuentas, si remitieron información (en un dispositivo de almacenamiento USB) tendiente a solventar la cédula de resultados preliminares de la cuenta pública 2023, omitiendo remitir los CFDI´S que fueron objeto de la promoción de responsabilidad administrativa 0136-23-22/01-CI-PRAS-02.

Luego entonces, de los alegatos rendidos por los sujetos a procedimiento, mediante escrito presentando en fecha dieciséis de febrero de dos mil veintiséis, se tienen aquí por reproducidos en obvio de repeticiones, que medularmente sintetizan su contestación al informe de presunta responsabilidad administrativa, así como la manera en que esta autoridad Sustanciadora deberá conducirse al dictar una sentencia definitiva fundada y motivaba en la que se respete el debido proceso, circunstancias que acontecieron en la estructura de la presente sentencia, al haberse analizado todos y cada uno de los elementos objetivos aportados por las partes; teniendo apoyo la tesis jurisprudencial con número de **registro digital 2005716** y de rubro:

> *"...**DERECHO AL DEBIDO PROCESO. SU CONTENIDO.***
>
> *Dentro de las garantías del debido proceso existe un "núcleo duro", que debe observarse inexcusablemente en todo procedimiento jurisdiccional, y otro de garantías que son aplicables en los procesos que impliquen un ejercicio de la potestad punitiva del Estado. Así, en cuanto al "núcleo duro", las garantías del debido proceso que aplican a cualquier procedimiento de naturaleza jurisdiccional son las que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha identificado como formalidades esenciales del procedimiento, cuyo conjunto integra la "garantía de audiencia", las cuales permiten que los gobernados ejerzan sus defensas antes de que las autoridades modifiquen su esfera jurídica definitivamente. Al respecto, el Tribunal en Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 47/95, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, diciembre de 1995, página 133, de rubro: "**FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO.**", sostuvo que las formalidades esenciales del procedimiento son: (i) la notificación del inicio del procedimiento; (ii) la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; (iii) la oportunidad de alegar; y, (iv) una resolución que dirima las cuestiones debatidas y cuya impugnación ha sido considerada por esta Primera Sala como parte de esta formalidad. Ahora bien, el otro núcleo es identificado comúnmente con el elenco de garantías mínimo que debe tener toda persona cuya esfera jurídica pretenda modificarse mediante la actividad punitiva del Estado, como ocurre, por ejemplo, con el derecho penal, migratorio, fiscal o administrativo, en donde se exigirá que se hagan compatibles las garantías con la materia específica del asunto. Por tanto, dentro de esta categoría de garantías del debido proceso, se identifican dos especies: la primera, que corresponde a todas las personas independientemente de su condición, nacionalidad, género, edad, etcétera, dentro de las que están, por ejemplo, el derecho a contar con un abogado, a no declarar contra sí mismo o a conocer la causa del procedimiento sancionatorio; y la segunda, que es la combinación del elenco mínimo de garantías con el derecho de igualdad ante la ley, y que protege a aquellas personas que pueden encontrarse en una situación de desventaja frente al ordenamiento jurídico, por pertenecer a algún grupo vulnerable, por ejemplo, el derecho a la notificación y asistencia consular, el derecho a contar con un traductor o intérprete, el derecho de las niñas y los niños a que su detención sea notificada a quienes ejerzan su patria potestad y tutela, entre otras de igual naturaleza..."* 228

De lo que se colige que, se respetaron los derechos procesales de los sujetos a procedimiento de responsabilidad administrativa, es decir, fueron notificados y emplazados al procedimiento en términos de ley, tuvieron la oportunidad de dar contestación al informe de presunta responsabilidad administrativa dirigido en su contra, la oportunidad de ofrecer material probatorio de su parte y desahogados en los plazos y conforme a la reglas de la Ley general de Responsabilidades Administrativas, la oportunidad de rendir alegatos, y la de recibir una sentencia definitiva en la que se diriman las cuestiones debatidas en el procedimiento de responsabilidad administrativa.

SEXTO. Individualización de la sanción. Establecida como ha quedado la responsabilidad administrativa de los ciudadanos **Evelio Navarro Lara**, **Víctor Manuel Amador Santos, y Verónica Vázquez Vázquez**, resulta procedente individualizar la sanción a la que se harán acreedores, atendiendo para ello a los criterios previstos en el artículo 76 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas:

PERSONA SUJETA A PROCEDIMIENTO.	**I.- El nivel jerárquico y los antecedentes de la infractora, entre ellos la antigüedad en el servicio.**	**II.- Las condiciones exteriores y los medios de ejecución.**	**III.- La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones.**
Evelio Navarro Lara.	El nivel jerárquico con el que contaba al haber fungido como Presidente Municipal del Ayuntamiento de Zacapoaxtla, Puebla, de la Administración 2021-2024. Asimismo, el elemento de antigüedad consiste en haber sustentado dicho cargo del quince de octubre de dos mil veintiuno al catorce de octubre de dos mil veinticuatro, es decir, tres años. Por lo que, a juicio de esta autoridad, la persona sujeta a procedimiento tenía la experiencia suficiente en las funciones del cargo, lo cual supone que la involucrada contaba con la experiencia que el puesto requiere para cumplir a cabalidad las actividades inherentes a su cargo, así como las prohibiciones y obligaciones a que debe constreñirse toda persona servidora pública.	De las actuaciones que conforman el expediente que nos ocupa, se desprende que se trata de una conducta que la persona sujeta a procedimiento efectuó de manera consciente, sin que hubiera mediado error alguno o bien se hubiese ejercido violencia en su contra en virtud de que en el desempeño del cargo que ostenta al momento de la comisión del hecho que se le imputa, la hacía conocer la correcta aplicación de la normatividad que le era aplicable a cada uno de los actos que conformaban sus funciones, empero a la actualidad la persona sujeta a procedimiento ya no se encuentra en funciones como servidora pública en el cargo de origen, por lo que dichos criterios obran en su contra.	Del informe emitido (oficio SABG/OS/UVSEA/2001/2026) por la Secretaría Antico rrupción y Buen Gobierno del Estado de Puebla se hizo del conocimiento a esta Autoridad que, de la búsqueda realizada en los Libros de Gobierno y el Sistema Estatal de Servidores Públicos y particulares Sancionados a nombre de Evelio Navarro Lara, no se encontró ningún registro de sanción impuesta por alguna autoridad Federal, Estatal o Municipal, por lo que se considera que no es reincidente, elemento que obra a su favor al momento de la determinación de la sanción.

Víctor Manuel Amador Santos.	El nivel jerárquico con el que contaba, el haber fungido como Contralor Municipal del Ayuntamiento de Zacapoaxtla, Puebla, de la Administración 2021-2024. Así mismo, el elemento de antigüedad, consiste en haber sustentado dicho cargo del quince de octubre de dos mil veintiuno al catorce de octubre de dos mil veinticuatro, es decir, tres años. Por lo que, a juicio de esta autoridad, la persona sujeta a procedimiento tenía la experiencia suficiente en las funciones del cargo, lo cual supone que la involucrada contaba con la experiencia que el puesto requiere para cumplir a cabalidad las actividades inherentes a su cargo, así como las prohibiciones y obligaciones a que debe constreñirse toda persona servidora pública.	De las actuaciones que conforman el expediente que nos ocupa, se desprende que se trata de una conducta que la persona sujeta a procedimiento efectuó de manera consciente, sin que hubiera mediado error alguno o bien se hubiese ejercido violencia en su contra en virtud de que, en el desempeño del cargo que ostentaba al momento de la comisión del hecho que se le imputa, la hacía conocer la correcta aplicación de la normatividad que le era aplicable a cada uno de los actos que conformaban sus funciones, empero a la actualidad la persona sujeta a procedimiento ya no se encuentra en funciones como servidora pública en el cargo de origen, por lo que dichos criterios obran en su contra.	Del informe emitido (oficio SABG/OS/UVSEA/2001/2026) por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno del Estado de Puebla, se hizo del conocimiento a esta Autoridad que, de la búsqueda realizada en los Libros de Gobierno y el Sistema Estatal de Servidores Públicos y particulares Sancionados a nombre de Víctor Manuel Amador Santos, no se encontró ningún registro de sanción impuesta por alguna autoridad Federal, Estatal o Municipal, por lo que se considera que no es reincidente, elemento que obra a su favor al momento de la determinación de la sanción.
Verónica Vázquez Vázquez.	El nivel jerárquico con el que contaba, el haber fungido como Tesorera Municipal del Ayuntamiento de Zacapoaxtla, Puebla, de la Administración 2021-2024. Así mismo, el elemento de antigüedad, consiste en haber sustentado dicho cargo del quince de octubre de dos mil veintiuno al catorce de octubre de dos mil veinticuatro, es decir, tres años. Por lo que, a juicio de esta autoridad, la persona sujeta a procedimiento tenía la experiencia suficiente en las funciones del cargo, lo cual supone que la involucrada contaba con la experiencia que el puesto requiere para cumplir a cabalidad las actividades inherentes a su cargo, así como las prohibiciones y obligaciones a que debe constreñirse toda persona servidora pública.	De las actuaciones que conforman el expediente que nos ocupa, se desprende que se trata de una conducta que la persona sujeta a procedimiento efectuó de manera consciente, sin que hubiera mediado error alguno o bien se hubiese ejercido violencia en su contra en virtud de que, en el desempeño del cargo que ostentaba al momento de la comisión del hecho que se le imputa, la hacía conocer la correcta aplicación de la normatividad que le era aplicable a cada uno de los actos que conformaban sus funciones, empero a la actualidad la persona sujeta a procedimiento ya no se encuentra en funciones como servidora pública en el cargo de origen, por lo que dichos criterios obran en su contra.	Del informe emitido (oficio SABG/OS/UVSEA/2001/2026) por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno del Estado de Puebla, se hizo del conocimiento a esta Autoridad que, de la búsqueda realizada en los Libros de Gobierno y el Sistema Estatal de Servidores Públicos y particulares Sancionados a nombre de Verónica Vázquez Vázquez, no se encontró ningún registro de sanción impuesta por alguna autoridad Federal, Estatal o Municipal, por lo que se considera que no es reincidente, elemento que obra a su favor al momento de la determinación de la sanción.

En relatadas consideraciones, toda vez que de los criterios en estudio obran en perjuicio las condiciones exteriores y los medios de ejecución, su antigüedad en el puesto así como la responsabilidad que éstas impliquen y la reincidencia de la conducta; tomando en consideración que se trata de una persona servidora pública inactiva resulta congruente imponer al ciudadano **Evelio Navarro Lara** la **SANCIÓN DE AMONESTACIÓN PÚBLICA**, conforme lo previsto en el artículo 75 fracción I de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

229

En esa misma línea de ideas, y toda vez que de los criterios en estudio obran en perjuicio las condiciones exteriores y los medios de ejecución, su antigüedad en el puesto así como la responsabilidad que éstas impliquen y la reincidencia de la conducta; tomando en consideración que se trata de una persona servidora pública inactiva resulta congruente imponer al ciudadano **Víctor Manuel Amador Santos** la **SANCIÓN DE AMONESTACIÓN PÚBLICA**, conforme lo previsto en el artículo 75 fracción I de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Así mismo, y toda vez que de los criterios en estudio obran en perjuicio las condiciones exteriores y los medios de ejecución, su antigüedad en el puesto así como la responsabilidad que éstas impliquen y la reincidencia de la conducta; tomando en consideración que se trata de una persona servidora pública inactiva resulta congruente imponer a la ciudadana **Verónica Vázquez Vázquez** la **SANCIÓN DE AMONESTACIÓN PÚBLICA**, conforme lo previsto en el artículo 75 fracción I de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

En suma, a los sujetos a procedimiento Evelio Navarro Lara, Víctor Manuel Amador Santos y Verónica Vázquez Vázquez, en su carácter de personas ex servidoras públicas del Ayuntamiento de Zacapoaxtla, se **le hace la amonestación** para que en lo subsecuente deban adherirse en sus funciones respetando los principios y directrices que rigen el actuar en una persona servidora pública en términos del artículo 7 y 49 fracción I de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y en específico con relación a las conductas atribuidas a cada uno de ellos en el presente asunto, de correcto ejercicio de sus funciones observando buenas prácticas con apego a la ley aplicable en sus funciones, esto para la correcta gestión de la Administración Pública Federal Estatal o Municipal, o a alguno de los tres poderes de la unión a la que llegaran a pertenecer en un futuro o presente.

En ese contexto, con fundamento en el artículo 27 del mismo ordenamiento legal, dichas sanciones administrativas serán registradas en la Plataforma Digital Estatal y/o Plataforma Digital Nacional, en términos de lo dispuesto por la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Puebla, y la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, asimismo, de la sanción administrativa impuesta a los tres responsables en la presente sentencia, con supresión de datos personales, se ordena realizar la publicidad en la Plataforma Nacional de Transparencia a través de la Dirección de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información del Ayuntamiento de Zacapoaxtla, Puebla, y la página Oficial del Ayuntamiento de Zacapoaxtla, Puebla, para conocimiento de la colectividad.

Por los argumentos expuestos y con fundamento en el artículo 12, fracción X de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, y 208, fracción X de la Ley General de Responsabilidades Administrativas se:

RESUELVE.

PRIMERO. Esta Autoridad resultó competente para resolver el procedimiento de responsabilidad administrativa número **OICMZ/AS/PRA/001/2025**.

SEGUNDO. Se determina la **RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA** de las personas ex servidoras públicas **Evelio Navarro Lara, Víctor Manuel Amador Santos y Verónica Vázquez Vázquez,** en los términos precisados en el punto tercero cuarto y sexto de los CONSIDERANDOS en la presente sentencia.

TERCERO. Una vez que cause ejecutoria la presente sentencia, realícense las acciones administrativas necesarias a fin de informar a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno del Estado de Puebla y/o al Sistema Estatal Anticorrupción de Puebla, a fin de que realicen las acciones necesarias para registrar la sanción administrativa en la Plataforma Digital Estatal y/o Plataforma Digital Nacional, respecto de las personas ex servidoras públicas Evelio Navarro Lara, Víctor Manuel Amador Santos y Verónica Vázquez Vázquez, en los términos precisados en el punto sexto de los CONSIDERANDOS en la presente sentencia. Y una vez hecho lo anterior, archívese el presente asunto como totalmente conoluido.

CUARTO. Notifíquese personalmente a los responsables, por oficio a la Autoridad Investigadora, y al denunciante titular de la Auditoría Superior del Estado de Puebla.

Así lo proveyó y firma el Licenciado Antonio Edgar Linares Mora, Autoridad Substanciadora del Órgano Interno de Control del Ayuntamiento del Municipio de Zacapoaxtla, Puebla. CONSTE.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ORGANO INTERNO DE CONTROL
AUTORIDAD SUBSTANCIADORA
ZACAPOAXTLA
AYUNTAMIENTO

236

LIC. ANTONIO EDGAR LINARES MORA
AUTORIDAD SUBSTANCIADORA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA,PUEBLA.

ZACAPOAXTLA
AYUNTAMIENTO 2024-2027
UN GOBIERNO CON SENTIDO HUMANO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ORGANO INTERNO DE CONTROL
AUTORIDAD SUBSTANCIADORA
ZACAPOAXTLA
AYUNTAMIENTO
2024-2027

OIC
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

17

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.
AUTORIDAD SUBSTANCIADORA.
PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA.
EXPEDIENTE NÚMERO: OICMZ/AS/PRA/001/2025.

EN EL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA A TRES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTISÉIS.

VISTOS. Con fundamento en los artículos 206, 207 208 facción XI y 210 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; artículo 12 fracción II del Reglamento Interior de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno; visto el estado procesal que guardan los autos del presente procedimiento, y en virtud, de ninguna de las partes recurrió en tiempo y forma legal a la sentencia definitiva de fecha veintisiete de mayo de dos mil veintiséis, en términos de lo dispuesto en el artículo 206 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, por lo que **se decreta que ha misma ha causado estado** para los efectos legales procedentes.

246

Luego entonces, con fundamento en el artículo 38[1] de los Lineamientos para los Procedimientos de Responsabilidad Administrativa en la Administración Pública del Estado de Puebla, a fin de que quede inscrita las sanciones en el Sistema Estatal de Servidores Públicos y Particulares Sancionados, **remítase** a la Unidad de Vinculación con el Sistema Estatal Anticorrupción de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno del Estado de Puebla, **copias certificadas de la sentencia definitiva de fecha veintisiete de mayo de dos mil veintiséis, y del auto que la declaró ejecutoriada,** a fin de que se proceda a la inscripción de las sanciones impuestas a **Evelio Navarro Lara** (con CURP NALE780511HPLVRVV02), **Víctor Manuel Amador Santos** (con CURP AASV860501HPLMNC00), **Verónica Vázquez Vázquez** (con CURP VAVV920402MPLZZR06),, y en términos de los puntos resolutivos PRIMERO SEGUNDO y TERCERO, consistente en **SANCIÓN DE AMONESTACIÓN PÚBLICA**, para cada uno de los infractores.

Así mismo requiérase al ente público que una vez de cumplimiento a lo solicitado, informe a esta Autoridad Substanciadora físicamente o vía electrónica al **correo institucional autoridadsubstanciadora@zacapoaxtla.gob.mx**; haciendo uso de los medios de apremio contemplados en la ley de la materia para hacer cumplir la determinación de esta Autoridad Substanciadora.

Así mismo remítase oficio a la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información del Ayuntamiento del Municipio de Zacapoaxtla, Puebla, a fin de que, con supresión de los datos personales, se ordene realizar la publicidad en la Plataforma Nacional de Transparencia, y la página oficial del Ayuntamiento de Zacapoaxtla, Puebla, para conocimiento de la colectividad, las sanciones impuestas a cada uno de los infractores en el presente procedimiento.

En términos del artículo 187 y 188 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, notifíquese a las partes por estrados.

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE.

Así lo proveyó y firma el Licenciado Antonio Edgar Linares Mora, Autoridad Substanciadora del Órgano Interno de Control del Ayuntamiento del Municipio de Zacapoaxtla, Puebla. CONSTE.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ORGANO INTERNO DE CONTROL
AUTORIDAD SUBSTANCIADORA
ZACAPOAXTLA
AYUNTAMIENTO
2024-2027

LIC. ANTONIO EDGAR LINARES MORA
AUTORIDAD SUBSTANCIADORA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA.

[1] "***Artículo 38. De la inscripción.*** *Las sanciones impuestas a las personas responsables, deberán ser inscritas en el Sistema Estatal de Servidores Públicos y Particulares Sancionados, en términos de los artículos 52 y 53 párrafo segundo de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Puebla, por lo que una vez que haya quedado firme la resolución, la Autoridad Resolutora en un plazo no mayor a cinco días hábiles, solicitará a la UVSEA la inscripción de la misma, acompañando copia certificada de la resolución sancionatoria, así como del acuerdo en el que se determina que dicha resolución quedó firme y en su caso, de las constancias que acrediten la ejecución de la sanción.*
Respecto a las abstenciones o no imposición de sanción que lleve a cabo la autoridad resolutora, deberá solicitarse su anotación a la UVSEA, en términos de los artículos 27 penúltimo párrafo, 77 y 80 de la LGRA."

ZACAPOAXTLA
AYUNTAMIENTO 2024-2027
"UN GOBIERNO CON SENTIDO HUMANO"

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

CERTIFICACIÓN.

EN ZACAPOAXTLA, PUEBLA, A SIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTISÉIS; SE HACE CONSTAR QUE EN CUMPLIMIENTO AL ACUERDO DICTADO CON FECHA TRES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTISÉIS, DENTRO DEL EXPEDIENTE NÚMERO **OICMZ/AS/PRA/001/2025** EN EL QUE SE ACTUA, SE EXPIDEN COPIAS COTEJADAS CONSISTENTE EN Diecisiete **FOJAS** ÚTILES.

ATENTAMENTE.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ORGANO INTERNO DE CONTROL
AUTORIDAD SUBSTANCIADORA
ZACAPOAXTLA
AYUNTAMIENTO
2024-2027

ANTONIO EDGAR LINARES MORA
AUTORIDAD SUBSTANCIADORA
DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
DEL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA.